

Acciones afirmativas y políticas públicas para la juventud en México: las cuotas electorales para jóvenes en 2021

NOMBRE: Mayra Lucero Flores Borjas

GRADO ACADÉMICO: Licenciatura

ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL: UAM. UNAM

CORREO ELECTRÓNICO: mayraflobo@gmail.com

RESUMEN

Los problemas electorales a los que se enfrentaron las juventudes durante el desarrollo de la elección federal de 2021 provocaron la creación de soluciones para esta población, mediante la implementación de políticas públicas de corte electoral, a través de acciones afirmativas.

Teniendo como objetivo general analizar las razones por las que la juventud no tuvo acciones afirmativas en México a nivel nacional durante el proceso electoral 2021, con el propósito de aportar elementos para la discusión sobre la relevancia de la inclusión de las juventudes en la representación política.

La creación de las acciones afirmativas permite una representación de las poblaciones históricamente vulnerables, para el caso del proceso electoral de 2021 el INE emitió acuerdos en el orden federal, el cual fue acatado dependiendo la entidad federativa y la circunscripción electoral.

En 2021 encontramos que algunas entidades elaboraron e implementaron cuotas electorales para sus jóvenes, los ejemplos son los Estados de Chiapas, Hidalgo y Michoacán que presentaron cuotas electorales con la normatividad aplicable, además de impugnaciones por parte de la ciudadanía, resoluciones del Tribunal y finalmente, con los acuerdos de los OPL.

Palabras clave: Política pública, acciones afirmativas, jóvenes, cuotas electorales, derechos políticos.

INTRODUCCIÓN

Históricamente se considera que los jóvenes han estado deslindados de la toma de decisiones y que, además, su participación en los procesos electorales está regida por el desinterés y la desmotivación en los temas de la agenda política.

Las personas jóvenes han sufrido exclusión en muchos asuntos políticos, pues se considera que por su edad no están lo suficientemente preparadas o que son inmaduras para tomar decisiones en la esfera pública.

La representación de los jóvenes en la vida democrática resulta sesgada y de difícil acceso, ya que la juventud no se siente representada ni acompañada por los partidos políticos. Siendo así, que la juventud se encuentre en desventaja electoral, al no contar con una verdadera representación que vele por sus intereses y derechos en la vida social y política del país.

Sin embargo, la constante lucha de otros grupos en vulnerabilidad como lo son las mujeres, comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas pertenecientes a la diversidad sexual y personas con discapacidad, han demostrado que se puede apelar por la protección de sus derechos políticos, a raíz de los ordenamientos internacionales y nacionales en materia electoral. En 2021 y a partir de algunas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió un acuerdo para autorizar acciones afirmativas, es decir, la creación de cuotas electorales para las poblaciones mencionadas.

El grupo sin cuotas para el proceso electoral federal 2021 fue la juventud. Sin embargo, el INE considero en el acuerdo que se estudiarían para la siguiente elección federal, pero en un país en el que habitan aproximadamente 30.7 millones de jóvenes (INEGI, 2021), se postergó la aprobación de la cuota.

Siguiendo esta tesitura, el acuerdo señala que como resultado del pasado proceso electoral 2017-2018 únicamente 28 personas jóvenes fueron electas como diputados federales (INE, 2021: 96), pese a la escasa representación legislativa, la juventud mexicana no está representada en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el INE, durante el proceso electoral del 2021, el 29% de la lista nominal nacional estaba conformada por ciudadanos entre 18 y 29 años de edad, es decir, más de 25 millones de jóvenes se encontraban

habilitados para ejercer su voto. A propósito, la edad mediana de la población en México es de 29 años.

Esto quiere decir que durante el año 2020 la población de México era considerada joven, por ende, los espacios y las políticas deberían ir encaminadas a esta población, para garantizar la protección, el reconocimiento y el otorgamiento de los derechos sociales y políticos.

Por ende, la presente investigación es un análisis de la implementación de acciones afirmativas en México para jóvenes de 18 a 29 años durante el proceso electoral de 2021. El objetivo general fue analizar las razones por las que la juventud no tuvo acciones afirmativas en México a nivel nacional durante el proceso electoral 2021, con el propósito de aportar elementos para la discusión sobre la relevancia de la inclusión de las juventudes en la representación política.

Con respecto de la literatura que atribuye discriminación y violencia hacia los jóvenes, son los prejuicios y estigmas sociales que atañen y dañan a las y los jóvenes, estas acciones propician exclusión hacia esta población. Con base en la encuesta sobre discriminación (ENADIS, 2017) se menciona que el 23.3% de la población de 18 años y más, señaló una negación injustificada a alguno de sus derechos (atención médica o medicamentos; recibir apoyos de programas sociales y atención en oficinas de gobierno). De la población joven encuestada, un 36% menciona que en el país sus derechos se respetan poco o nada.

Las y los jóvenes se enfrentan a situaciones particulares dependiendo su zona geográfica, su desarrollo humano o desarrollo social, misma que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) menciona que México cuenta con una diversidad demográfica, concentrando el 52.9% de las personas adolescentes y jóvenes en 8 entidades federativas: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas. De manera sustancial, se deben contemplar un mínimo de cuotas dependiendo la entidad federativa como en el caso de las comunidades indígenas, donde tenían una formula específica para garantizar el acceso a las diputaciones federales.

Así mismo, reconocer la diversidad intercultural que existe en las juventudes, es decir, la presencia de las identidades juveniles atendiendo a elementos contextuales, históricos, geográficos, etc. Implica fomentar y aprovechar mecanismos de acción afirmativa y

discriminación positiva que permitan el empoderamiento de ciertas minorías étnicas, tanto autóctonas (con relación a los pueblos originarios), como alóctonas (que provienen de otros países) (Giroux, 1994; McLaren, 1997). Al hablar de las minorías étnicas juveniles se deben mencionar a las personas jóvenes afromexicanas y pertenecientes a pueblos y barrios indígenas u originarios que, si bien no son las únicas en el país, se han caracterizado por conformar sectores con altos niveles de discriminación estructural (IMJUVE, 2020: 28).

Por lo anterior, se reconoce que grupos históricamente discriminados y/o culturalmente vulnerables, como lo son las personas pertenecientes a pueblos indígenas, poblaciones migrantes o la comunidad LGBTI, están inmersos en la comunidad juvenil.

En temas de juventud relacionados con política, se logran identificar dos grupos: los que atribuyen la idea de que la juventud no es participativa (dependencias gubernamentales y sociedad adulta) y los que mencionan que la juventud sí es participativa (colectivos juveniles, legisladores, Organismos intergubernamentales, ONGS, etc.). Independientemente de la ideología, la juventud busca un cambio social y político, pelean por nuevas oportunidades académicas y laborales, pero, por el hecho de que la juventud es una etapa de transición hacia la adultez, en muchas ocasiones son aislados de la toma de decisiones no sólo en materia política y electoral, sino también social, económica y académica.

Para cumplir con el objetivo general, la investigación se integra por cinco capítulos. En el primero, se presentan las decisiones metodológicas de la investigación. Es decir, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, la pregunta de investigación, el argumento principal y la hipótesis, así como la presentación de casos en las Entidades federativas, lo anterior planteado en un estudio de caso a nivel federal.

En el segundo, repasaremos algunos conceptos básicos sobre derechos políticos, juventud y cuotas electorales. Así como atribuir los elementos necesarios de ciudadanía dentro de la comunidad juvenil. Aunado a la relación elemental entre las políticas públicas y acciones afirmativas. El tercero, trata sobre el contexto social y político de las juventudes en el 2021, y la construcción histórica de las autoridades y cuotas electorales en México, incluyendo la implementación de las acciones afirmativas en poblaciones específicas: indígenas, discapacitados, afromexicanos, diversidad sexual y de las mujeres durante el proceso electoral 2021.

En el cuarto, se expone el proceso electoral en México en 2021 y la intervención de los acuerdos electorales en las elecciones. Así como las cuotas que se crearon en el proceso electoral 2021. Finalmente, en el capítulo quinto, abordamos las conclusiones de esta tesis.

CAPÍTULO 1. METODOLÓGICO

A partir de una agenda metodológica cualitativa, que consistió, en la revisión documental punto central de la adquisición de información.

El nivel de esta investigación es exploratorio, de esta manera se lograron diseñar las siguientes variables: la variable dependiente de esta investigación es la construcción de cuotas electorales con base en el INE y TEPJF, por ende, la variable independiente de esta investigación son los ordenamientos legales en materia de juventud.

La estrategia en la investigación fue la realización de un estudio de caso enfocado a nivel subnacional, para exponer la ausencia de una base legal aplicable que proteja los derechos políticos de las juventudes a nivel nacional.

El objetivo principal de la investigación fue analizar por que la juventud no tuvo acciones afirmativas en México a nivel nacional durante el proceso electoral 2021, con el propósito de aportar elementos para la discusión sobre la relevancia de la inclusión de las juventudes en la representación política.

El objetivo teórico es estudiar la relación conceptual entre acciones afirmativas con políticas públicas, derechos políticos, juventud y cuotas electorales.

El objetivo histórico contextual es conocer el proceso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir resoluciones ante el acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral 2021 para la implementación de las acciones afirmativas en poblaciones específicas: indígenas, discapacitados, afroamericanos, diversidad sexual y de las mujeres candidatas y representantes de elección durante el proceso electoral.

El objetivo analítico es indagar en la implementación de acciones afirmativas juveniles a nivel subnacional y la intervención de las cortes en la protección de los derechos políticos de la juventud.

El argumento principal de esta investigación es que la juventud no apelo por la protección de sus derechos políticos en las elecciones nacionales ante el Tribunal electoral, por ende,

se formuló la siguiente hipótesis: las razones por las que no se implementaron acciones afirmativas para la juventud de 18 a 29 años en México durante el proceso electoral 2021, fueron la falta de juicios estratégicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la ausencia de una base jurídica nacional que sustente la creación de la cuota y por ende que proteja los derechos políticos de los jóvenes.

CAPÍTULO 2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS: RELACIÓN CONCEPTUAL

La ciudadanía, es una institución en constante proceso de redefinición, con objeto de poder dar respuesta a los cambios que se producen en las sociedades democráticas. Esta perspectiva sustantiva -alejada del formalismo jurídico- (García & Lukes, 1999 en Benedicto, 2016: 927) propicia el camino hacia nuevos agentes capaces de incidir en la esfera pública del país, mediante la visibilización de la amplia gama del significado de ser ciudadano o ciudadana.

Entre los agentes de cambio (por excelencia) son los rasgos característicos de la juventud de las sociedades democráticas contemporáneas, que, recientemente han sido acreedores para obtener facultades de la ciudadanía.

Sin embargo, el gran obstáculo con el que se enfrentan todos los intentos de comprometer activamente a los jóvenes es que no se les considera ciudadanos plenos. Ni en la teoría ni en la práctica se les reconoce a los jóvenes la condición de ciudadanos y, por consiguiente, su capacidad y legitimidad para influir en los procesos políticos y sociales de su comunidad. Mucho se habla de los jóvenes como ciudadanos futuros, ciudadanos incompletos, tal y como hacía Aristóteles en La Política o ciudadanos en proyecto en palabras de Marshall. Pero lo importante es que en todos estos casos se sigue definiendo al joven en negativo: aquél que no ha alcanzado el final del proceso (sin un empleo, sin una formación acabada, sin una familia propia). De ahí, que no se les trate como individuos a los que hay que reconocer y potenciar su estatus de miembros plenos de la comunidad, asumiendo las peculiaridades de su propia condición juvenil.

Es así, que los derechos políticos son derechos humanos de primera generación (...) Cabe resaltar que, desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia, así como a la creación de

un Estado democrático, social y de derecho. Lo anterior, tal como lo dispone Alberto Dalla (2011), entendiendo que la democracia contribuye a la consolidación de los derechos políticos y que los derechos políticos legitiman el régimen democrático por sus alcances encaminados a la igualdad y equidad de oportunidades.

Los derechos políticos tienen un estatus internacional de derechos humanos, pero con el matiz de que en todos los países se comienzan a ejercer cuando las personas cumplen ciertos requisitos de edad y residencia, principalmente, según las reglas de cada Estado (...).

Derivado de su exégesis, los derechos políticos han tenido una connotación electoral, en virtud de que el único mecanismo de participación de los ciudadanos en la selección de sus representantes es el sufragio, aun cuando no sólo se ciñe a elecciones representativas sino, además y de forma extensiva, a los procesos de participación ciudadana (Hernández, 2007: 534).

Para el caso concreto de la investigación y desde el enfoque de la ciudadanía juvenil¹⁴, el debate parece estar referido a las múltiples manifestaciones del hecho social de ser joven, sus vínculos en cuanto congéneres y sus relaciones con el mundo adulto, sus maneras de subjetivarse y las discusiones acerca de su posible despolitización o desinstitucionalización. Herrera y Muñoz (2008) señalan que el debate central sobre esta categoría es su potencial para develar las restricciones políticas ejercidas sobre los jóvenes y sus manifestaciones culturales a partir de enunciados como: su carencia de fuerza y capacidad para actuar en la vida política o su incapacidad para elegir racionalmente su representación política. La batalla central de la ciudadanía juvenil será la confrontación a las formas naturalizadas de incapacitar a los jóvenes para el ejercicio político.

A propósito del concepto de juventud, no existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud, ya que se puede ver desde diferentes enfoques (medicina, psicología, sociología, etc.), estas perspectivas son homogéneas, puesto que generalizan a las personas jóvenes a partir de un rango de edad para el estudio estadístico. Por otro lado, esta homogenización ha tenido entre sus efectos negar la diversidad juvenil, invisibilizando (por ejemplo) a mujeres jóvenes, indígenas, rurales, jóvenes con discapacidad, en situación de calle, entre otros.

En el caso de las juventudes, el adulto centrismo permea la gran mayoría de enfoques ya que (1) las personas adultas se encargan de escribir literatura sobre personas jóvenes y (2) son las personas adultas las encargadas de contribuir a los estigmas y prejuicios entorno a la juventud, mismos que son reproducidos de generación en generación. A propósito, el adulto centrismo “pone en condición de superioridad algunas personas por sobre otras por el sólo hecho de tener cierta edad -ser mayores o cumplir con ciertos roles sociales (trabajar, estar casado, participar en elecciones, etc.) (...) luchar contra el adulto centrismo no es luchar contra los adultos, sino contra las expresiones de esa cultura dominante y, al mismo tiempo, construir identidades juveniles basadas en los aportes que las y los jóvenes pueden hacer a nuestro mundo desde las potencialidades que poseen” (Duarte, 2006 en UNFP, 2010: 6).

Para fines de esta investigación se entiende a la juventud como aquel grupo poblacional conformado por hombres y mujeres con diferentes características físicas y sociales (dependiendo el territorio y su entorno de desarrollo), que se encuentran entre los 18 y 29 años de edad¹⁸, siendo este un periodo de transición hacia la adultez. La edad que se emplea en esta investigación es con base en lo que establece el INE y con lo que la mayoría de los países occidentales reconocen como la mayoría de edad, que es entre los 18 y los 21 años. Eso significa que las personas que alcanzan esa edad pueden acceder plenamente a los derechos civiles y políticos.

Como lo afirmó Bourdieu, la “juventud” no es más que una palabra. Bajo esta concepción se pretende subrayar que, más allá de una etapa de la vida de una persona, la juventud es una condición social y también una construcción sociocultural, históricamente definida, lo cual significa que ser joven varía en tiempo y espacio, dependiendo de las características de cada sociedad.

La ciudadanía cambia, cada día hay más jóvenes cumpliendo dieciocho años y cada día más personas salen a la actividad social, política y económica del país. Esto significa que la ciudadanía es altamente dinámica, y ese dinamismo no nos permite dar nada por hecho. Aquellos orígenes conflictuales que dieron nacimiento a las normas que representan una solución hay que tenerlos presentes, pues nunca se superan, ya que siguen siendo desafíos.

Las políticas diseñadas desde esta perspectiva aspiran a modificar las causas estructurales que perpetúan o ahondan la desigualdad, mientras que las políticas para mujeres son indiferentes a esas causas estructurales. Una de las estrategias inmediatas y más efectivas

es la adopción de acciones afirmativas o, también conocidas como medidas especiales temporales. (Reyes, E y Medina, A, 2007)

En el caso de la relación entre la política pública con la acción afirmativa y tras el análisis del origen del concepto de la misma; se puede traducir en política compensatoria. Es decir, la política pública es acción afirmativa y la acción afirmativa reúne sentido en las bases elementales de la política pública, ya que ambas poseen los mismos elementos: temporalidad (son implementadas en un tiempo determinado), población objetivo (son determinantes a un conjunto poblacional, por ejemplo: mujeres, comunidades indígenas, etc), se encargan de visibilizar un problema público actual (dependiendo su contexto histórico, en cualquier materia social) y protegen los derechos civiles, sociales, culturales y políticos, dando así, igualdad de oportunidades.

ESQUEMA 2. RELACIÓN ELEMENTAL ENTRE POLÍTICA PÚBLICA Y ACCIÓN AFIRMATIVA



Tal y como se conciben hoy en día, las políticas de acción afirmativa (Affirmative Action) orientan sus esfuerzos hacia la promoción de beneficios temporales que les permitan a los grupos más vulnerables alcanzar mayores y mejores niveles de acceso, calidad y eficiencia respecto a la oferta pública y privada de bienes sociales, culturales, económicos y políticos de una sociedad de bienestar con equidad social. Las acciones afirmativas tienen un carácter temporal y se configuran como un conjunto “coherente” de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad acumulativa y persistente de la población que todavía no cuenta con las condiciones necesarias y suficientes para

alcanzar la “igualdad efectiva”: desde el momento inicial de partida, cuando compite con los grupos sociales históricamente más beneficiados inter generacionalmente hasta el logro de los resultados en los diferentes mercados de bienes y servicios, incluso el acceso a todos los cargos de decisión más importantes en la vida social (Castro, J; Urrea, F; Viáfara, 2009).

ESQUEMA 3. ÁMBITOS DE APLICABILIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

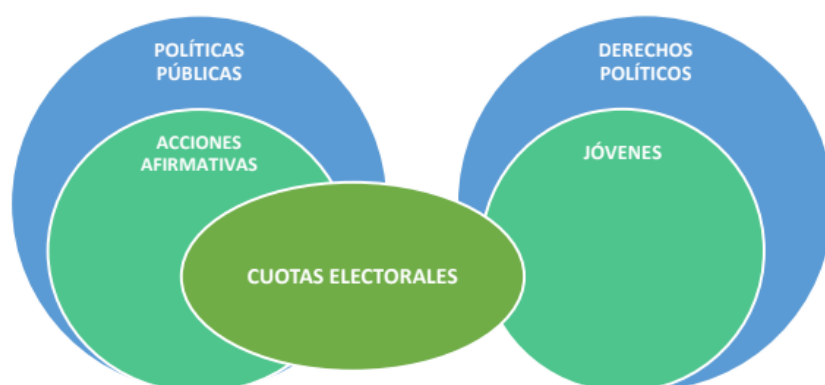


Fuente: Elaboración propia con base en el recorrido conceptual.

Las cuotas son una forma de acción afirmativa o medida de igualdad de oportunidades diseñada para abordar el lento ritmo de cambio en la participación de las mujeres y los grupos minoritarios en áreas de la sociedad donde históricamente han estado subrepresentadas, incluido el empleo, la educación y las instituciones políticas. Las cuotas generalmente implican el establecimiento de un determinado número o porcentaje de plazas a ser ocupadas por los colectivos infrarrepresentados.

En síntesis, la relación conceptual de la tesis da comienzo con la identificación de los conceptos principales, primeramente, políticas públicas, mismas que han sido catalogadas dentro de la concepción de acciones afirmativas, es decir, las acciones afirmativas son políticas públicas (por su relación elemental). El segundo concepto principal es derechos políticos, a los que son acreedores los jóvenes (segundo concepto secundario) por el hecho de ser ciudadanos y partícipes de la vida política del país. Por último, el concepto que une a los conceptos principales y secundarios es: cuotas electorales, al ser la consolidación de la investigación, el cual se materializa en el rubro electoral.

ESQUEMA 4. RELACIÓN CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN



Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 3. ELECCIONES Y JÓVENES EN MÉXICO. CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2021

Con la reforma constitucional en materia electoral en febrero de 2014, se rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: ahora llamado, el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. En ese mismo año, ante el TEPJF se creó una sala especializada para conocer y resolver casos de violación de propaganda política en radio y televisión, también actos anticipados de campaña.

El Tribunal se define como “un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral”. (TEPJF, 2022).

Por su parte, el INE se define como el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México (INE, 2017).

Así mismo, México es un país joven en pleno límite²⁷ hacia la adultez, en la actualidad el país cuenta con un importante contingente de mujeres y hombres jóvenes entre 15 y 29 años. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 31

millones de personas de 15 a 29 años, que representan 25% del total de la población en el país.

La juventud mexicana durante el año 2020 se conformaba por grupos de edad de la siguiente manera, 10.8 millones tenían entre 15 y 19 años, y representaban el 35% del total; 33% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 32% (9.9 millones) entre 25 y 29 años.

A propósito, México cuenta con una diversidad demográfica, concentrando el 52.9% de las personas adolescentes y jóvenes en 8 entidades federativas: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas. (UNFPA, 2022). Por lo tanto, se debe considerar que las entidades federativas tienen diferencias territoriales y sociales, mismas que son comprobables en la estructura poblacional de cada entidad: “resulta relevante comentar que existe una importante variación en cuanto a las dinámicas demográficas al interior de cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, Chiapas cuenta con la población más joven: 24 años, mientras que la Ciudad de México cuenta con la edad media más alta del país: 35 años” (UNFPA, 2022).

La Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS, 2017) menciona que la juventud es un grupo en discriminación y vulnerabilidad social. Con base en la ENADIS (2017) los prejuicios más comunes entorno a la juventud son: “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables” y “los jóvenes que no estudian ni trabajan son flojos para la mayoría de la gente”. Lo anterior, aunado a una negación de los derechos, por ejemplo, en atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales y/o atención en oficinas de gobierno.

En el caso concreto de las juventudes en México, el deterioro de su relación con las instituciones públicas³³ se manifiesta en la desconexión y desilusión de los diferentes espacios sociales que se desenvuelven. Muestra de ello, son los resultados de la EJM 2019, que indica que la mayoría de los jóvenes encuestados mencionó no tener “muchas confianza” en empresas privadas, organizaciones religiosas y de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación, sistema educativo, gobierno, fuerzas armadas, diputados, senadores, partidos políticos ni en el presidente de la república.

CAPÍTULO 4: LAS CUOTAS ELECTORALES EN 2021 Y LA EXCLUSIÓN DE LAS JUVENTUDES A NIVEL NACIONAL

Formalmente, el Proceso Electoral Federal comenzó el 7 de septiembre 2020. El 18 de noviembre de 2020 el consejo general del INE emitió el acuerdo INE/CG18/2021, correspondiente a las acciones afirmativas, el documento es relativo al marco normativo para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto. Sin embargo, fue hasta el 19 de marzo de 2021 cuando se emitió el acuerdo para determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de diputados por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos.

Ahora bien, como señala Sánchez (2020) es de gran relevancia señalar que en 2021 fue la primera vez que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en las 32 entidades federativas del país, en las cuales se renovaron los cargos de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.

Desde inicios del 2020, el consejo general del INE mediante el acuerdo INE/CG18/2021 contempló la necesidad de incluir a las poblaciones históricamente vulneradas en la conformación de acciones afirmativas para el proceso electoral federal 2021.

La creación de las acciones afirmativas permite una representación de las poblaciones afectadas: para el caso del proceso electoral el INE emitió este acuerdo en el orden federal, el cual fue acatado dependiendo la entidad federativa y la circunscripción electoral.

Las poblaciones que se han visto favorecidas por acciones afirmativas han sido las mujeres, comunidades indígenas, comunidad de la diversidad sexual, afroamericanos y discapacitados.

Para que exista una acción afirmativa, esta debe contar con datos sobre la población, cifras que corroboren (aprueben o rechacen) la creación de estas, base constitucional e internacional para promoverlas y convencer de que es una población afectada. Por ejemplo, para el caso de los pueblos originarios, se contemplaba un sustento legal internacional (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe) y nacional (Artículo 2° constitucional). Por los ordenamientos legales se “aprobó” la acción afirmativa, distribuida en cuotas electorales, es decir, al menos una (1) fórmula deberá ubicarse en los primeros diez (10) lugares de cada lista. La medida implementada permitió asegurar que, como piso mínimo, trece (13)

personas de origen indígena accedieran a diputaciones federales vía la acción afirmativa implementada.

La finalidad de la acción afirmativa con base en el INE/CG18/2021 es establecer condiciones de igualdad y garantizar el acceso de las comunidades indígenas a cargos de representación popular.

Finalmente, las cifras de las poblaciones aprobadas con cuotas electorales para el proceso electoral 2021 fueron la población indígena que abarca 7,382,785 de personas que son hablantes de una lengua indígena en México, lo que representa el 6.5% de la población del país; la población con discapacidad abarca 7.8 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 6.3%; las personas afroamericanas son 1,381,853 personas, lo que representa el 1.16%; y finalmente, las personas de la diversidad sexual son 2,700,000 personas que declaran no ser heterosexuales, lo que representa el 3.2% de la población nacional.

Por lo anterior expuesto, las poblaciones consideradas vulnerables para el INE cuentan con sustento constitucional y con tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Para el caso de las juventudes, no hay una base legal internacional ni nacional que proteja los derechos políticos de los jóvenes.

El Consejo General consideró que las personas jóvenes estarían representadas, tanto por el principio de paridad transversal⁴¹ como en las acciones afirmativas a implementar para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las que se conmina a los partidos políticos a postular a población joven en observancia al principio de igualdad sustantiva.

De alguna manera, la intención de fomentar acciones afirmativas para la juventud queda inmiscuida en el acuerdo, mismo que no tiene facultades de obligatoriedad como pueden llegar a disponer las leyes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Código Federal De Instituciones Y Procedimientos Electorales (COFIPE) o la Ley General De Partidos Políticos (LGPP).

Por lo anterior, existen barreras legales que no permiten que la juventud sea acreedora a las acciones afirmativas (lo que no sucede con las otras poblaciones). Es decir, no permiten la creación de cuotas. Se ejemplifica en el siguiente esquema:

ESQUEMA 9. LIMITANTES JURIDICAS A LAS QUE SE ENFRENTÓ EL INE
PARA NO EMITIR CUOTAS JUVENILES.



Para el caso de las juventudes, se vislumbra la necesidad de construir ordenamientos legales específicos para la población juvenil. Lo anterior no se ha legislado, ya que México sigue sin ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, siendo el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes.

APRENDIZAJES DEL ÁMBITO SUBNACIONAL

Debido a la autonomía de los Estados, al estar conformados en un sistema federal se tienen constituciones e instituciones propias que en materia electoral se encargan de proteger los derechos políticos y contribuir a la formación de las elecciones federales y locales de forma imparcial.

Una diferencia que se ha presentado, respecto a la defensa de los derechos de las juventudes, es que en algunas entidades federativas se ha elaborado su Ley local de la Juventud, sin embargo, no hay una ley nacional de las juventudes.

En la misma tesitura, en 2021 encontramos que algunas entidades elaboraron e implementaron cuotas electorales para sus jóvenes, A continuación, se describen los ejemplos de Chiapas, Hidalgo y Michoacán que presentaron cuotas electorales con

fundamentos legales de cada estado, mediante impugnaciones de la ciudadanía, resoluciones del Tribunal y finalmente con los acuerdos de los OPL.

ENTIDAD AFIRMATIVA	ORDENAMIENTO JURIDICO APLICABLE
MICHOACÁN	Con base en la sentencia TEEM-JDC-028-2021 del tribunal, se desglosan a continuación los sustentos legales aplicables al caso de Michoacán. La base legal fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; el Código Electoral del Estado de Michoacán, la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De manera nacional a la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con el apoyo de la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán.
HIDALGO	La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código electoral local y la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo.
CHIAPAS	Artículo 30 de la constitución federal, el código electoral local, (...) la Ley De La Juventud Para El Estado De Chiapas

Elaboración propia

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

En esta tesis se analizó el caso de las cuotas juveniles a nivel nacional durante el proceso electoral 2021 en México. Entre los hallazgos se encuentra, en un primer momento, que la ciudadanía es compleja y multidimensional. La base conceptual de ciudadanía suele relacionarse con ciertos requisitos para tener “capacidad” de ejercicio de derechos y autonomía personal, por ejemplo, la ciudadanía es la calidad que adquiere el que, teniendo una nacionalidad y habiendo cumplido las condiciones legales requeridas (la edad), asume el ejercicio de los derechos políticos que le habilitan para tomar parte activa en la vida pública del Estado y se somete a los deberes que le impone su calidad.

En particular, la ciudadanía juvenil expone la ardua necesidad de diversificar y replantear la visión histórica del significado de ser acreedor de derechos y contribuir a la esfera política del país.

Así mismo, la edad es un elemento subjetivo, es algo que termina en determinado momento, en cambio, las personas indígenas, discapacitadas, afromexicanas y de la diversidad sexual siempre pertenecerán a sus respectivas comunidades.

En un tercer momento, se encuentra la influencia de las autoridades electorales en la decisión de los partidos políticos al colocar ciertos perfiles en los espacios designados en las candidaturas para grupos en vulnerabilidad. Si bien, la constante en materia de juventud es la debilidad del derecho político pasivo al no proponer menores de 30 años, la ciudadanía juvenil que conocía sus derechos y facultades ante el tribunal, cuestionando las bases jurídicas y políticas que impiden un ejercicio pleno del derecho a ser votado tenía mayor ventaja al apelar la protección de sus derechos políticos.

Finalmente, la importancia de las leyes a favor de la juventud a nivel subnacional. Como parte de los aprendizajes en el ámbito subnacional tenemos que las constituciones y los códigos electorales locales fueron la base legal para su construcción a partir de las sentencias de los tribunales y los acuerdos de los institutos. Además, se identificó que a nivel subnacional se ha dado mayor atención a las juventudes debido a que en estos Estados se han promulgado leyes para las juventudes. Por ende, a nivel nacional encontramos ese vacío legal que explica porque no se implementaron las cuotas juveniles.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, L. (2012) Introducción. Políticas Públicas. Siglo XXI EDITORES. México. P.17-60. Recuperado de http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/i_pp_eap.pdf

Aparicio, F. (2011) Cuotas de género en México: candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Serie Temas selectos de derecho electoral. Recuperado de https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/18_Francisco%20Javier%20Aparicio_Cuotas%20de%20g%C3%A9nero.pdf

Arámbula, A. (2008) Acciones afirmativas. Centro de documentación, investigación y análisis, Subdirección de Política Exterior. LX Legislatura. Cámara de diputados. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-12-08.pdf>

Gilas, K. (2014) Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras acciones afirmativas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Temas selectos de Derecho Electoral. Num.49. Pp. 7-75. Recuperado de https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Temas%20Selectos%20de%20Derecho%20Electoral%20No.%2049.pdf

López, S. (2010). Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica. Política y cultura. Pp. 185-190. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018877422010000100011

Matías, M. (2020) Derechos políticos del ciudadano y su protección. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP. Cámara de diputados. LXIII LEGISLATURA. IIJ. UNAM. Pp. 1-26 Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6214/2.pdf>

Noto, G. (2014) Ciudadanía política: Voz y participación ciudadana en América Latina. Siglo Veintiuno Editores, 1a ed. PNUD. FLACSO. Buenos Aires. P.38. Recuperado de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/140767-opac>

Torres, I. (2010) Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad. Revista IIDH. Vol.47. Núm. 10. Pp. 225-240. Recuperado de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23830.pdf>

UNFP. (2010) El enfoque de juventudes: Hacia una visibilización positiva de las personas jóvenes. Consejo Nacional de la política pública de la persona joven. Naciones Unidas. Costa Rica. Recuperado de https://costarica.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cpi-1a_enfoque_juventudes.pdf